

La democracia a prueba

FERNANDO PÉREZ CORREA

Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

La lectura del quinto informe de gobierno del presidente Fox acreditó que hemos alcanzado la confrontación como el signo rutinario de las relaciones políticas. El lenguaje, el modo, los tonos mismos de la comunicación tenían el tufo inequívoco del enfrentamiento. Peor aún, el informe no fue leído ni escuchado en su propio tiempo, en el ámbito de las relaciones entre el Congreso y el presidente: el punto de referencia del texto, la lista de ausentes, la agenda, los auto elogios y las descalificaciones fueron las urnas de julio del 2006, la elección, la lucha por el poder. Pero esa fecha mágica, dueña ya de la política, tan cercana que comanda hasta el último gesto, es en rigor un enigma incierto y distante. El año 2006 plantea interrogantes diversas. Una, es obvia: ¿y quién va a ganar?; otras, contienen las claves de nuestra convivencia.

En este texto abordaremos solamente algunas cruciales: 1) el marco normativo; 2) la autoridad electoral; 3) las precampañas; 4) la campaña presidencial y las otras campañas; 5) la jornada electoral y los resultados. En fin, concluimos con 6) algunas reflexiones sobre gobernabilidad y estabilidad política.

1

El proceso electoral de 2000 se llevó a cabo bajo reglas pactadas. Los partidos y agrupaciones ciudadanas acordaron en 1996 la llamada "reforma electoral definitiva". Como consecuencia, el IFE se integró con el consenso de las fracciones parlamentarias y sus órganos no fueron cuestionados. Igual ocurrió con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los acuerdos básicos (sobre procesos preparatorios, padrón nominal, credencial y lista de electores con fotografía, formatos del material electoral; montos, monitoreos y evaluación de los gastos de campaña, entre otros) propiciaron una atmósfera de competencia civilizada. Y aunque las campañas, especialmente la de Vicente Fox, alcanzaron un tono de confrontación agudo, los acuerdos sobre el marco norma-

tivo resultaron determinantes y los resultados no fueron impugnados.

En la actualidad se registra la erosión del clima de concertación y las expectativas son menos optimistas. Algunas cuestiones potencialmente conflictivas merecen ser subrayadas. Aún abstracción hecha de los rezagos en la reforma del Estado, el listado de pendientes normativos es vasto: En materia de gasto, la cuestión crucial, la fiscalización del financiamiento electoral, no ha sido zanjada; los costos de las precampañas son ya cuestionados y las tarifas diferenciadas en los medios de comunicación han generado protestas airadas; en fin, el sistema de contratación de publicidad en radio y televisión con la intervención del IFE, parece una alternativa cada vez más remota. De hecho esta última cuestión destaca entre los obstáculos que hicieron imposible la aprobación de una nueva Ley Federal de Radio y Televisión. En suma, como resultado del gasto publicitario y la intervención inequitativa de los medios, es previsible la descalificación del proceso electoral,

Especial mención ameritan los vacíos procedimentales producidos por el voto postal de los mexicanos en el extranjero. En efecto, no están previstas las reglas para el caso (un retraso considerable del correo, o una participación masiva de difícil procesamiento) que hiciera imposible cumplir los plazos electorales. No hace falta una excesiva suspicacia para ser pesimista sobre las inconformidades previsible.

2

De mayor consecuencia pueden ser las secuelas de la renovación del Consejo General del IFE. Como se recordará, después de infructuosas tentativas por alcanzar una integración por consenso, la Cámara de Diputados lo nombró por mayoría del PRI y el PAN, el 31 de octubre de 2003. "Carro completo del PRIAN en el nuevo Consejo General; asalto al IFE", tituló *La Jornada* su edición del día siguiente. "Un IFE mal nacido" fue el título del editorial. El escándalo dio lugar al



anuncio de un conflicto: la impugnación de los resultados electorales de 2006. El 2 de noviembre, *Reforma* subrayó en la primera plana: “Denuncia el PRD complot para 2006”. Todavía días más tarde, el 5 de noviembre, el PRD informó que solicitaría a la Cámara de Diputados “reponga el procedimiento de elección a los consejeros” del IFE. Aunque con menos intensidad, las críticas continuaron durante los siguientes meses. Sólo las sanciones que el Instituto impuso al Partido Verde, a finales de 2003, por los procedimientos internos no democráticos de éste; y a otros partidos, en abril de 2004, por haber rebasado los topes de las campañas, desplazaron el foco de atención y ofrecieron un respiro al nuevo Consejo General. Sin embargo, las críticas se intensificaron de nuevo en 2005, cuando se rechazó con dureza la crítica que Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del Instituto, dirigió a la Cámara de Diputados, por los efectos incontrolables que tendría la minuta sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Es probablemente inevitable que con las peripecias de la competencia electoral el IFE continúe cuestionado.

La impugnación al IFE, las lagunas jurídicas y las discrepancias sobre otros puntos, son ingredientes negativos: no contribuyen a incrementar la certidumbre de los procesos electorales; en cambio, alientan el recelo regresivo sobre la limpieza electoral y estimulan el cuestionamiento de los resultados.

3

El tema de las precampañas reclama ciertas referencias concretas a las elecciones, incluyendo las locales. Para la elección presidencial, el partido que enfrenta mayores incertidumbres es el PRI. Es conocido el encono con que enfrentan a Roberto Madrazo, hasta ahora el más fuerte precandidato del tricolor, tanto Elba Esther Gordillo, como un grupo de gobernadores priistas. La maestra decidió no acudir a la reunión en la que sería investida presidenta del otrora invencible e inmediatamente separada del cargo, y recurrir al Tribunal Electoral para impugnar la elección de Mariano Palacios como nuevo presidente. El enfrentamiento no podría ser más agudo. Por su parte, el grupo Tucom, encabezado ahora por Arturo Montiel como precandidato, se dispone a desplegar todos sus recursos, que son cuantiosos, para ganarle la candidatura al tabasqueño. El objetivo es, en efecto, llevar a Montiel a la presidencia de la República. En ese cua-

dro, es concebible una alianza entre éste y la dirigente magisterial, cuyas bases fueron decisivas hace tres años para el encumbramiento de Madrazo como presidente del PRI. Por otro lado, éste ha mantenido un firme control sobre el aparato partidista, como lo acreditan, entre otras cosas, la destitución de la maestra Gordillo de su cargo de líder parlamentario, a principios de 2004; el apoyo que ha obtenido su precandidatura entre la mayoría de los gobernadores tricolores y los comités directivos estatales; y en fin, el aislamiento en que se encuentra la antigua secretaria general. Estos antecedentes, de suyo onerosos, presagian incontables calamidades para el tricolor. El conflicto jurídico puede terminar en el encumbramiento de la maestra, su destitución consecuenta, y un escándalo que sería una auténtica contracampaña de efectos devastadores. La competencia entre Montiel y Madrazo, por lo demás, apunta hacia un agrio conflicto de efectos severos sobre la unidad interna y el voto ciudadano.

Pero el regreso del tricolor a Los Pinos es una posibilidad real. Así lo perciben muchos protagonistas políticos. Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, ha llamado a la unión de todas las fuerzas democráticas para impedirlo, mientras el propio presidente Fox ha rechazado la posibilidad de una vuelta al pasado. No olvidemos, además, que Madrazo, el precandidato tricolor con más altas expectativas entre los votantes, es también el personaje con el más alto nivel de rechazo (39%). En contraste, aunque para muchos balbuceante e impresentable Arturo Montiel es un precandidato relativamente fresco, cuyos niveles de aceptación son comparables a los de su adversario (el pasado 23 de agosto, *Reforma* les asignó, respectivamente, 40 y 45%). Más aún, como lo demostró recientemente Peña Nieto en la mayoría de los municipios del Estado de México (y como lo acreditan las elecciones de los últimos tres años), el triunfo del PRI no está excluido, aun en zonas de alto voto histórico en favor del PAN y el PRD.

En el frente blanquiazul, aunque la moneda aún está en el aire, se registra ya la estrepitosa caída de la ventaja de Santiago Creel sobre Felipe Calderón y Alberto Cárdenas. Es un enigma la posición del presidente, de quien se afirma que ve con buenos ojos la precandidatura de Alberto Cárdenas, ex gobernador de Jalisco. Lo cierto es que, aunque éste se ha ganado el apoyo de connotados empresarios y líderes blanquiazules, su despeque parece tardío. En fin, el retiro

de Barrio, la frustración de los medinistas y el lenguaje airado de Calderón, no dejarán de tener un costo sobre la suerte de Creel, cuya posición en la carrera presidencial frente al PRI y el PRD, según las encuestas, es ya desventajosa.

Están por verse los efectos que tendrá sobre este ejercicio el capital político del presidente Fox, quien contará el año próximo con la enorme ventaja de ser el Presidente de la transición democrática, al que ya no se le exigirán mayores logros. Con un razonable nivel de crecimiento económico, una inversión social sustanciosa y una sostenida campaña mediática, el presidente Fox podrá brindar al candidato blanquiazul un apoyo significativo. Obsérvese que en los últimos días el gobierno federal ha adoptado una línea cortoplacista de tono preelectoral: autorizó la regularización de más de dos millones de autos ilegales, mientras rehuyó la confrontación con el sindicato minero en el caso de la Siderúrgica las Truchas, y no parece decidido a sostener a toda costa el gravamen en el ISR sobre las prestaciones laborales. El nuevo presupuesto refleja la continuidad de la política económica, la posposición de inversiones de largo plazo y la concentración de los ingresos en renglones de política social de alto rendimiento político. Además, de triunfar Calderón, un candidato echado adelante, listo para encabezar a las bases históricas del PAN, y a los intereses económicos, podría quedar en el aire el apoyo que los grandes intereses estaban resignados a brindar al PRI, al reconocer en Madrazo al supuesto valladar capaz de contener al PRD.

El PRD parece encaminado a postular al ex jefe de Gobierno del D. F (cuyos niveles de popularidad lo mantienen en una clarísima ventaja interna y nacional) y al abrigo así de un cisma interno. Acaso ensombrecan sus perspectivas diversas circunstancias.

Una es la supuesta precandidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha llamado a la conformación de una nueva izquierda y estaría en negociaciones con el Partido del Trabajo para registrar su candidatura. Aunque el ingeniero Cárdenas no obtuviera más allá de algunos puntos en la elección, incuestionablemente se trataría de votos desviados del potencial de López Obrador. Se trata, sin duda, de una posibilidad, aunque remota. En efecto, Lázaro Cárdenas Battel, gobernador de Michoacán e hijo del ingeniero, es un destacado dirigente perredista que podría jugar decisivamente a favor de la unidad. Otra circunstancia es la elección en el D. F. En efecto, a pesar de la gran

popularidad en la zona metropolitana, López Obrador no pudo impedir el fracaso de Yeidckol Polevsky en el Estado de México. Algunos observadores anuncian un tropiezo análogo con la candidatura de Marcelo Ebrard. Acaso exageren. No obstante, aunque cuenta con el apoyo bejaranista, dicha candidatura ha generado la resuelta oposición de muchas tribus del sol azteca. En efecto, diversas fuerzas se han aliado y comprometido a apoyar al candidato más aventajado entre Jesús Ortega, Pablo Gómez y Armando Quintero. Quizás este enfrentamiento mengüe o incluso amenace a la postre el triunfo perredista en el D. F., particularmente si la precampaña cobra un tono de descalificaciones ácidas en contra del "candidato oficial".

La posición de López Obrador, sin embargo, no es análoga a la volatilidad de Labastida hace seis años. La hostilidad del gobierno federal de la que el tabasqueño ha sido blanco durante los últimos años, generó en su favor una especie de blindaje, de modo que sus simpatizantes, que ya han oído todo en contra de su candidato, no prestan oídos ni siquiera a los hechos concretos. En los análisis de prospectiva más recientes, los observadores políticos persisten en el reconocimiento de López Obrador como el más probable candidato triunfador de 2006.

4

A lo largo de los últimos años se ha hecho patente que el tono dominante de las relaciones entre los partidos políticos (y entre los poderes) es la confrontación. El Congreso de la Unión se ha distinguido por la hostilidad entre las fuerzas políticas que lo integran. Cualquiera que sea su fundamento objetivo, el persistente bloqueo a las iniciativas del presidente solo es comparable con la sistemática persecución del gobierno federal a las figuras de la oposición. En ese sentido es previsible que las campañas tiendan, más que a cobrar un tono propositivo, a explotar las vulnerabilidades de los adversarios. La descalificación, como hemos visto, tendrá también como blanco las instituciones electorales. En ese cuadro, es de esperarse un ambiente de hostilidad y ataques recíprocos.

Este clima no estimula la participación. Peor aún, el torrente de dinero que se invertirá en las campañas, el desmesurado número de candidatos a diputados y senadores que serán registrados y competirán; en fin, el ruido local de las campañas de gobernador en

algunos estados, y de jefe de Gobierno en el D.F., generarán probablemente una sobreexposición publicitaria y un efecto de confusión y hartazgo en los ciudadanos. Aún para los expertos, será difícil retener el nombre de los candidatos a los distintos cargos sobre los que deberá elegir cada votante. Esta saturación no estimula una alta participación.

En el D. F. los tres grandes partidos estarán obligados a evitar una derrota humillante, cuyo efecto pudiera ser irreparable en la elección federal. De ahí la importancia de las candidaturas a jefe de Gobierno. Quizá el partido que enfrente menores desgastes sea el PRI, cuya posible candidata, Beatriz Paredes, no tiene aún adversarios internos a la vista, y despierta el respeto y la simpatía de los intereses históricos del tricolor, los medios y los sectores ilustrados. Sin embargo, conviene recordar que el PRI iniciará la campaña con una desventaja abismal frente al sol azteca.

Es difícil que el PAN se anime a contar con una candidatura "ciudadana", como la que podrían ofrecer el senador Demetrio Sodi o el doctor Jorge Castañeda: podría resultarle ruinoso el costo electoral de carecer de un candidato propio en la capital de la República. Sin embargo, el PAN se enfrentará a la carencia de nombres. Acaso podríamos conjeturar que, en última instancia, surgirá como candidato uno de los precandidatos a la presidencia de la República.

Para el PRD, como hemos indicado, el proceso pudiera resultar oneroso. Los niveles de descalificación que ha alcanzado ya la precandidatura de Marcelo Ebrard son notables. Sin embargo, el ex jefe de Seguridad Pública del D. F., despedido por Fox, compartió con López Obrador la confrontación con el gobierno federal y se convirtió en un emblema de resistencia y lealtad. En esas condiciones, presumiblemente conservará el apoyo del ex jefe de Gobierno capitalino. Sin embargo, el cargo al que aspira es clave para los otros contendientes por su importancia estratégica para la supervivencia de sus respectivas bases. El enfrentamiento interno pudiera ser encarnizado.

La postulación de candidatos a diputados y senadores generará también agudas discrepancias. La prensa registró el desaire del que fue víctima Leonel Cota en agosto pasado al convocar a los líderes delegacionales y a los precandidatos a legisladores del PRD capitalino. Las luchas por los cargos partidistas distritales, locales y nacionales han sido sin cuartel y, a menudo, han generado divisiones y aún escisiones. En ese nivel, la disputa por las candidaturas hace esperar enconados enfrentamientos. Estos procesos se reflejarán inevitablemente en las urnas.

En este orden, el PAN parece situarse en una posición menos delicada, ya que no son tan intensos los enfrentamientos entre sus corrientes internas, y las listas de candidatos podrán integrarse componiendo los intereses de los grupos internos, los del candidato presidencial y los del actual gobierno federal.

El PRI, en cambio, puede enfrentar una crisis de graves consecuencias. De hecho, el cuestionado Mariano Palacios, en su calidad de presidente, asumirá formalmente el control del proceso de selección y postulación de candidatos, a menos que el Tribunal Electoral decida favorablemente la inconformidad de Elba Esther Gordillo. Pero sea quien sea quien controle el proceso, será portador de intereses propios, distintos a los madracistas o montielistas. Además, el PRI sufrirá las presiones de su estructura corporativa y, también, del candidato a la presidencia y de la probable candidata a jefa del Gobierno del D. F. Tampoco estarán ausentes los aspirantes de la vieja guardia histórica. De hecho, el universo de oportunidades es minúsculo comparado con la constelación de aspirantes. La lucha interna será enconada, tanto más a la luz de las experiencias recientes que enseñaron el valor estratégico de controlar la fracción parlamentaria.

Mención aparte merecen el resto de los otros partidos. En el D. F., el Ecologista y Convergencia cuentan con una clientela más o menos leal. Probablemente el Partido del Trabajo, si Cárdenas u otro personaje atractivo es candidato, contará también con una fracción del electorado. Los nuevos partidos, el de Patricia Mercado y el del magisterio tradicional, se enfrentarán a formidables dificultades para obtener la votación requerida. Ahora bien, en su conjunto, la influencia de los partidos minoritarios podrá ser determinante para fragmentar al electorado. La contienda tripartidista se verá consecuentemente afectada. Es concebible así que el partido triunfador apenas obtenga un poco más del tercio de los votos.

También estarán presentes los factores que desalentarán la participación, a los que conviene agregar ahora la convocatoria del subcomandante Marcos a construir otra forma de hacer política. En efecto, la VI Declaración de la Selva Lacandona invita a "las organizaciones políticas y sociales de izquierda que no tengan registro, y a las personas que se reivindicuen de izquierda que no pertenezcan a los partidos políticos con registro, a reunirse en tiempo, lugar y modo que les propondremos en su oportunidad, para organizar una campaña nacional (...) para escuchar y organizar la palabra de nuestro pueblo. Entonces es



como una campaña, pero muy otra porque no es electoral". "La otra campaña" ha generado ya una agria controversia entre el EZLN y diversos autores y comentaristas, ya que en su presentación no han faltado las descalificaciones al PRD y a sus dirigentes y candidatos. La jornada electoral aparece así bajo tonos sombríos. Las tendencias presagian el desánimo de los electores, y las perspectivas apuntan hacia un desalentador índice de abstención.

En resumen: jugarán un papel negativo los niveles de confrontación, el cuestionamiento de la autoridad del IFE, las dificultades tremendas del voto postal desde el extranjero y la sobresaturación de los medios de comunicación. No está excluido que, además de un voto severamente disminuido, se produzca una fragmentación extrema, que los triunfos resulten de ventajas exiguas y que, consecuentemente, se alienten las impugnaciones y el rechazo de los resultados.

Es concebible la confirmación de un patrón de voto regional y socialmente segmentado: grupos profesionales, clases medias y sectores económicos en apoyo del PAN, con una viva presencia en el bajío y el norte de la república; voto de grupos adultos, mujeres, sectores profesionales corporativos, sectores populares, obreros y campesinos, en favor del PRI, en todo el territorio nacional, con una tendencia a la representación estable de un tercio de la población; voto de sectores de economía informal, marginados, tercera edad y grupos populares emergentes, en favor del PRD, con una fuerte presencia en el sur, sureste y centro de la República. En ese orden, la elección registrará la segmentación regional y social de la sociedad.

6

Desde 1982 se ha registrado en el país una disminución creciente del peso de la política como la variable fundamental de la articulación social. De hecho, los niveles de discrepancia y polarización de la segunda mitad del gobierno del presidente Zedillo, que determinaron la parálisis legislativa y alentaron la alternancia, no tuvieron ningún efecto discernible en el crecimiento económico. Al contrario, de entonces data la estabilización económica y la política deliberada de blindaje financiero. Más aun, la crispación prevaleciente en 1994 no impidió al entonces nuevo gobierno tomar las amargas medidas que reclamaron los efectos del "error de diciembre"; como tampoco la fragmentación de los poderes federales y estatales, en el año de la alternancia, impidió al presidente Fox

impulsar un nuevo estilo político y alentar la marcha zapatista. En suma, la fragmentación política no ha implicado ni la polarización, ni la ruptura social. Si algo se advierte en este ámbito, son diversas líneas deliberadas de confrontación.

A un año de las elecciones prevalece la estabilidad. Parece difícil un colapso constitucional que trunque la normalidad democrática. Pero después, en la perspectiva, será preciso contar con formas de acuerdo político que destraben el proceso legislativo y favorezcan la conformación de alianzas políticas. El nuevo gobierno abrirá su mandato seguramente con un Congreso dividido y congresos y gobiernos estatales en cohabitación.

La estructuración esencialmente tripartidista de la sociedad mexicana no es un artificio: está fundada en la segmentación social en estratos y regiones, y en la especialización de la representación política. Cada partido cuenta con una base social definida, un voto duro propio. Este atributo puede ser una fortaleza democrática. Para ganar, cada partido está obligado a buscar un apoyo volátil mediante agendas amplias, compromisos programáticos y la inclusión de ciudadanos; esto es, a moderar sus posiciones. Con incentivos apropiados, la fragmentación puede inducir a la reforma, la concertación y la tolerancia, en contraposición con el radicalismo y la intransigencia. Pero, para desencadenar procesos de pluralismo y composición de intereses es necesaria la presión ciudadana. Ahora bien, hasta ahora, no están jugando un papel determinante las asociaciones de ciudadanos ni los foros de concertación. De hecho, el procesamiento de demandas y la composición de intereses se ha trasladado, de los espacios de la política, a los arreglos de la administración con los sectores productivos y sociales. No ha surgido un espacio de composición alternativo, ni se han apropiado los poderes de la capacidad de convertir el pluripartidismo en el instrumento del acuerdo público. Esa es una tarea decisiva que debe ser llenada no por un sistema sino por un proceso, por la política, entendida como el arte de componer intereses y concertar la voluntad común.

La tarea central de la sociedad parece evidente: en el corto plazo, la voz ciudadana puede desalentar el recurso a la violencia verbal y al enfrentamiento, y alentar en cambio una competencia electoral positiva e incluyente; en el largo plazo, dicha voz puede influir en la tarea de construir gobiernos compartidos, apoyados en mayorías legislativas estables, pactadas.